

DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEGISLACIÓN INDÍGENA: RELACIÓN QUE NO ENCUENTRA UN PUNTO DE EQUILIBRIO

RODRIGO BENÍTEZ URETA

RESUMEN: El presente artículo examina la última sentencia de la Corte Suprema en relación al Proyecto Minero El Morro, de 7 de octubre de 2014 que, revocando una decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, dejó sin efecto dos informes de CONADI y, consecuentemente, la resolución de calificación ambiental que aprobaba el proyecto. Lo anterior, con un trasfondo que alude a la normativa en materia de consulta indígena contenida en el Convenio N° 169 de la OIT, pero finalmente en una decisión que tiene como sustento conceptos propios del derecho administrativo. El autor critica el análisis que la Corte Suprema hace del caso y cómo su visión de ciertos aspectos de la regulación de la consulta indígena difiere de otras decisiones de la misma. Adicionalmente, revisa el razonamiento del fallo en relación con la fundamentación de los actos administrativos, proponiendo la forma en que, a su juicio, debe armonizarse dicha normativa con la evaluación ambiental de proyectos.

SUMARIO: 1. Introducción 2. Análisis evolutivo de las sentencias previas 2.1. Aspectos generales de la evaluación ambiental 2.2. El primer fallo sobre el proyecto: Corte de Apelaciones y Corte Suprema 3. La sentencia 4. Criterio de la Corte de Apelaciones 4.1. En relación a las alegaciones de las comunidades y asociaciones indígenas diaguitas 4.2. En relación a las alegaciones de la comunidad agrícola diaguita huascoaltinos 5. La Corte Suprema 6. Voto de minoría 7. Comentario y conclusiones 8. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

Unos meses antes de la creación de una nueva institucionalidad ambiental el año 2010, a través de la Ley N° 20.417, comenzó a regir en nuestro país el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (el Convenio N° 169). En este sentido, debe recordarse que

“Para efectos del derecho chileno y de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en la causa

Rol N° 309-2000, las únicas normas autoejecutables de este son las siguientes: “Artículo 6°. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Asimismo, sería autoejecutable el artículo 7° N°1 en su oración segunda que establece: “Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”¹.

Por tanto, puede decirse que a partir del año 2010 se genera un cambio sustancial en materia regulatoria, del cual deben hacerse cargo los proyectos de inversión en Chile. Por una parte, los titulares de proyectos deberán enfrentarse a una nueva estructura institucional en materia ambiental, que separa sus competencias en un Ministerio que tiene a su cargo la elaboración de nueva normativa; el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el instrumento de gestión probablemente más exitoso de las últimas décadas²; la Superintendencia a cargo de la fiscalización y la sanción; y por otra, incluir en el diseño de sus proyectos la componente indígena, sometiéndose además a un proceso de consulta especial y con características propias que difieren de la participación ciudadana estándar.

Sin duda que ello ha generado cambios en el sistema, y uno de dichos cambios tiene que ver con la litigiosidad que se ha generado específicamente en proyectos sometidos a evaluación ambiental, y que tienen algún componente indígena, sea por emplazarse en territorios utilizados por indígenas, por afectar sitios de significancia cultural, o por alterar sus sistemas de vida y costumbres, entre otros.

¹ CARRASCO (2013) p. 302.

² El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).

El presente artículo examina la segunda sentencia de la Corte Suprema referida al Proyecto Minero El Morro³. El interés en esta decisión se genera en las profundas diferencias argumentativas entre la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó –que rechaza los recursos de protección– y lo resuelto por la Corte Suprema.

En primer lugar se analizará el proceso que ha seguido el proyecto El Morro (i) el primer recurso de protección deducido y la obligación impuesta originalmente por la Corte Suprema; (ii) la forma en que tanto el titular como las autoridades dieron cumplimiento al fallo, llevando a cabo el proceso de consulta; (iii) la argumentación desde el punto de vista de la consulta indígena dada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, en relación a un segundo recurso de protección; y (iv) cómo la Corte Suprema deja a un lado toda la fundamentación en materia de consulta indígena –misma que ella ha utilizado en otras sentencias– para finalmente acoger los recursos de protección deducidos, después de años de tramitación ambiental del proyecto, por un vicio procedimental que se habría detectado.

Adicionalmente, al efectuar este análisis se revisará la jurisprudencia en materia de consulta indígena, intentando extraer lineamientos generales que ilustren la materia. Se revisará, asimismo, jurisprudencia en relación a los vicios procedimentales y cómo estos inciden en el acto administrativo terminal, lo que nos permitirá efectuar una crítica al razonamiento de la Corte Suprema, muy en la línea del voto de minoría de la sentencia comentada.

Las conclusiones, buscarán dar una respuesta razonada al punto de equilibrio que debe existir entre la legislación indígena y el procedimiento administrativo –todo inserto en la evaluación ambiental de proyectos de inversión– para no seguir cargando de incertidumbres el sistema.

2. ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LAS SENTENCIAS PREVIAS

2.1. Aspectos generales de la evaluación ambiental

El proyecto minero El Morro fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el 25 de noviembre de 2008.

³ Rol N° 11.299/2014

Como se sabe, la Ley N° 19.300 define este tipo de estudios como “el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos”. (Artículo 2.i). Según establece la ley, la presentación de un EIA resulta obligatoria si el proyecto o actividad (que debe ser de aquellos listados en el artículo 10 de la ley) se enmarca en alguno de los supuestos que se establecen en su artículo 11. Es decir, presentan a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias que el artículo 11 describe, ya sea en relación a la salud de las personas, a la cantidad y calidad de los recursos naturales, a las comunidades o grupos humanos, a poblaciones, recursos y áreas protegidas, al valor paisajístico de una determinada zona o al patrimonio cultural.

La Comisión de Evaluación de Atacama, órgano encargado de resolver sobre la calificación ambiental de los proyectos o actividades sometidos al SEIA, luego de dos años desde el inicio de la fase de evaluación calificó favorablemente el proyecto El Morro, mediante la Resolución Exenta N° 49, de 14 de marzo de 2011, certificando que este cumplía con la normativa de carácter ambiental, que se habían presentado los requisitos necesarios para el otorgamiento de los permisos sectoriales, y que las medidas de mitigación y compensación propuestas en el Estudio eran adecuadas.

2.2. El primer fallo sobre el proyecto: Corte de Apelaciones y Corte Suprema

Deducido recurso de protección en contra de la Resolución de Calificación Ambiental N° 49, por parte de la Comunidad Agrícola de los Huascoaltinos, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resuelve acoger dicho recurso basado en que existía un grupo de personas respecto de las cuáles el proyecto no había cumplido con los estándares del Convenio N° 169 de la OIT. En efecto, la Corte indica que:

“Según se ha venido razonando y de acuerdo a la transcripción de la Resolución Exenta 049 con relación al reasentamiento de las comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos, el proyecto solo

consideró tres familias de crianceros, además de una persona que pertenece a una de estas familias y “que tiene su majada propia”, por lo que es lógico deducir que los integrantes de la Comunidad Agrícola y especialmente las cuarenta y tres personas individualizadas en la parte expositiva –según certificados de fs. 418 a 460 que acreditan sus calidades de indígena– le es aplicable la normativa nacional e internacional ya referida, debiendo el estudio de impacto ambiental de proyecto El Morro considerarlos específicamente, porque independientemente a la circunstancia que la comunidad agrícola Los Huasco Altinos no haya tenido a la fecha de la elaboración del proyecto un reconocimiento como Comunidad Indígena, lo cierto es que sus integrantes ya individualizados tienen tal calidad y les afecta el proyecto porque se comprobó que son titulares del derecho de dominio inscrito de terrenos respecto de los cuales iniciarán las actividades de explotación la Sociedad Contractual Minera El Morro”⁴.

Esta sentencia fue luego confirmada por la Excma. Corte Suprema, la que efectuó una precisión al indicar que:

“el acto ordenado dejar sin efecto corresponde a la Resolución Exenta N° 49 de fecha 14 de marzo de dos mil once dictada por la Comisión de Evaluación Región de Atacama que califica favorablemente el Proyecto El Morro, en tanto no se subsanen las deficiencias observadas en el fundamento undécimo del fallo en alzada a las consideraciones contenidas en la letra c) en relación a la letra d) del N° 11 de dicha Resolución de Calificación Ambiental”.

Por tanto, en este caso no se dejó sin efecto la evaluación ambiental⁵, sino que únicamente la resolución de calificación ambiental del proyecto, dando la Corte Suprema la fórmula mediante la cual el proyecto podía nuevamente obtener la calificación ambiental favorable, esto es, subsanando las deficiencias detectadas por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el sentido de incluir en su evaluación al resto de la comunidad que tiene calidad indígena y que sería afectada por el proyecto.

⁴ Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 618-2011, considerando 11°.

⁵ Como erróneamente indicó en su sentencia la Corte de Apelaciones de Antofagasta, excediendo lo pedido por el recurrente.

En tales circunstancias, el Servicio de Evaluación Ambiental, debió retrotraer el proceso de evaluación para subsanar las materias referidas al componente indígena, a que se refiere el considerando 11° de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Por tanto, lo que correspondía era dictar un nuevo Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (IC-SARA), a fin de que los servicios competentes hicieran nuevamente las consultas al titular sobre la materia y este reconociera –si correspondía– la existencia de afectación a grupos humanos indígenas y propusiera las medidas adecuadas, luego de un proceso de consulta específico para dichos grupos.

En definitiva, lo que hace este primer fallo sobre el proyecto minero El Morro no es indicar que el proyecto afecta a los grupos humanos indígenas, sino que solo constata la existencia de los mismos, debiendo el órgano administrador del SEIA proceder a reencauzar el procedimiento administrativo para que, en caso de determinarse afectación, iniciar un proceso de consulta tendiente a dar cumplimiento a la normativa internacional en la materia.

Dicho proceso finalizó en el mes de octubre de 2013 –casi cinco años después del inicio de la evaluación del proyecto– otorgándose una resolución de calificación ambiental favorable⁶ que permitía dar inicio a la ejecución del proyecto.

3. LA SENTENCIA

Como se ha indicado, el Servicio de Evaluación Ambiental, los demás servicios competentes y el propio titular del proyecto en el marco de los adendas presentados al proceso de evaluación, dieron –a su juicio– cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, en el sentido de hacerse cargo de la existencia de grupos humanos indígenas en la zona, dando inicio a un proceso de consulta, y finalizando con una resolución que da cuenta de dicho proceso.

Sin embargo, esta nueva resolución de calificación ambiental fue objeto de nuevos recursos de protección por parte de Comunidades y Asociaciones Indígenas Diaguitas; por la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, y por tres agricultores de la zona.

⁶ Resolución Exenta N° 232/2013, de la Comisión de Evaluación de Atacama.

Las alegaciones de los recurrentes, en lo que interesa, se fundamentan en lo siguiente:

- a. Comunidades y Asociaciones Indígenas Diaguitas: El proyecto fue autorizado sin haber llevado a cabo la consulta indígena a ninguna de dichas comunidades, sino que únicamente a la Comunidad Agrícola Huascoaltina.
- b. Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos: No se les habría consultado en forma previa, libre e informada de acuerdo a lo que establece el Convenio N° 169 de la OIT. Los esfuerzos de la autoridad carecerían de una voluntad real para implementar la consulta, lo que se agrega al desconocimiento del carácter colectivo de sus derechos.

Todo ello privaría, perturbaría y amenazaría el legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución Política reconoce en el artículo 19, específicamente en sus numerales 2, 21, 22 y 24.

No nos referimos a las alegaciones de los agricultores, ya que exceden la temática indígena y no tienen mayor relevancia en lo resuelto en las sentencias analizadas.

4. LA CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ

De forma unánime, la Corte de Apelaciones⁷ hace un acabado análisis de la materia, haciéndose cargo ordenadamente de las alegaciones de cada recurrente y entrando en el fondo de la materia, revisando pormenorizadamente la regulación atingente a la consulta indígena, para lo cual cita no solo las disposiciones normativas internacionales y nacionales, sin también la jurisprudencia de la propia Corte Suprema e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4.1. En relación a las alegaciones de la Comunidades y Asociaciones Indígenas Diaguitas

La Corte deja asentado en su fallo que uno de los requisitos fundamentales para la obligación de consulta indígena es "... que exista una susceptibilidad de *afectación directa*, exigencia que fija un estándar mínimo necesario para que proceda la consulta, condición que no solo determina cuándo es procedente el trámite de

⁷ Rol N° 436-2013, considerando 8°.

la consulta, sino asimismo, cuáles son los sujetos de ella”. Por eso, explica la Corte, para la normativa ambiental solo los proyectos que generan “impactos significativos”⁸ se encuentran en el supuesto de dicha afectación directa y por dicha razón es requisito dar inicio a un proceso de consulta de conformidad al artículo 85 del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Corte, de modo general indica que este criterio ha sido refrendado por la jurisprudencia de los tribunales superiores. Aunque no cita ninguna sentencia en relación a este punto, de una somera lectura de la última jurisprudencia de la Corte Suprema, es posible sostener esta afirmación.

Mediante sentencia Rol N° 30.026-2014, la Corte Suprema confirma un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta⁹ en relación al proyecto “Parque Eólico Tchamma” indicando que

“Como se ve, y sin perjuicio de la falta de demostración de la afectación que señalan, *pretenden, en definitiva, que baste la mera creencia subjetiva de una eventual afectación para imponer la obligación de consulta. Ello no deriva del tratado ni razonablemente puede ser la interpretación que se otorgue a la señalada exigencia,* desde que bastaría la concurrencia respecto de cualquier miembro de una etnia indígena de un mero sentimiento desprovisto, circunstancia medianamente objetiva para hacer procedente dicha obligación, lo que no resiste análisis lógico y jurídico”¹⁰. (El destacado es nuestro).

Se desprende del fallo que no basta con indicar de modo general la existencia de una afectación, sino que se exige como requisito básico que ella sea acreditada, ya que de lo contrario, se estaría excediendo las disposiciones del propio Convenio N° 169, lo que la Corte Suprema –al menos hasta esa fecha– lo tiene sumamente claro.

Sobre este punto se ha dicho que “Ya se ha visto que el artículo 6 del Convenio 169 delinea los elementos-estándares de la consulta indígena en términos muy genéricos –afirmación que es válida res-

⁸ En referencia al artículo 11 de la Ley N° 19.300.

⁹ Rol N° 1246-2014.

¹⁰ Considerando 10°. El destacado es nuestro. En el mismo sentido, Corte Suprema Rol N° 17.599-2014, Corte Suprema Rol N° 22.461-2014, entre otros.

pecto del elemento de susceptibilidad de afectación directa–, y que la Comisión de Expertos no aporta criterios adicionales para orientar su implementación”¹¹, por lo que se ha confiado a los gobiernos el trabajo de implementar en la práctica estos conceptos. En la misma línea ha argumentado Contesse, al expresar que “La aplicación de esta norma¹² –a través de la regulación de la participación ciudadana en el Reglamento del SEIA– permitiría incorporar una regulación especial para la participación de los pueblos indígenas”¹³. Sin duda, desde la perspectiva ambiental, esta tarea ha sido llevada a cabo con la regulación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por ello, la Corte de Copiapó, correctamente a nuestro juicio, señala que la prueba aportada por los recurrentes no permite evidenciar la existencia de impactos significativos a su respecto, entre otras razones, porque “el lugar de emplazamiento de las obras tampoco corresponde a sectores donde los recurrentes realicen actividades productivas o de manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, ni tampoco a espacios ligados a sus creencias, mitos y usos tradicionales”. Para reforzar el argumento, cita una sentencia de la Corte Suprema¹⁴, referida al proyecto “Central Hidroeléctrica Panguí”, que confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y que en síntesis señala que:

“La alegación de proximidad a una población protegida, tampoco es criterio suficiente por sí mismo si no se ha justificado algún grado de afectación a aquella. Y, en la especie, no se ha explicitado ningún impacto concreto a la comunidad aledaña ni a los otros entes recurrentes, respecto de lo cuales por lo demás no se especifica determinadamente cuáles serían los efectos perniciosos del mentado proyecto”¹⁵.

¹¹ DONOSO (2013) p. 69.

¹² Se refiere al artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 19.300 que establece “Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

¹³ Ver CONTESSE (2012).

¹⁴ Rol N° 8616-2013.

¹⁵ Rol N° 1377-2013, considerando 11°.

De lo analizado hasta acá, podemos afirmar que es correcto el pronunciamiento de la Corte de Copiapó respecto al proyecto El Morro, y además es fundada su alusión a que este criterio estaba respaldado por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores.

Basado en ello, la Corte de Copiapó concluye que la única comunidad afectada directamente por el proyecto es la Comunidad Agrícola Huascoaltina, motivo por el cual acoge la alegación de la Autoridad Ambiental relativa a la falta de legitimación activa del recurrente. Asimismo acoge la alegación de extemporaneidad del recurso, basada en que los recurrentes, no dedujeron recurso de protección contra de la resolución de calificación ambiental original.

Pero la Corte no se queda ahí y prosigue con un análisis del fondo, haciendo ver que todos los órganos sectoriales competentes¹⁶ validaron la evaluación ambiental al medio ambiente humano en su componente indígena, constando además que transcurridos cuatro años de evaluación ambiental,

“los peticionarios no aportaron antecedentes, información, evidencia o prueba alguna que permita concluir que cuentan con derechos sobre el territorio donde se desarrolla el proyecto, que efectivamente se afecte la calidad del aire que respiran de los recurrentes, descartándose que puedan sufrir afectación alguna de los recursos hídricos, ya que el proyecto no utilizará los recursos del Río Huasco, debido a que contempla la construcción de una planta desaladora para el abastecimiento de agua durante su operación”¹⁷.

Idénticas consideraciones realiza respecto de eventuales impactos en la calidad de las aguas, flora, fauna y patrimonio arqueológico, para finalizar señalando que sin perjuicio de todo ello, el titular había ofrecido una medida voluntaria en relación a las comunidades recurrentes, con el objeto de que quedara plasmada en el permiso ambiental y fuere, por ese hecho, obligatoria y fiscalizable .

De la lectura del fallo se viene a la memoria una sentencia de la Corte Suprema del año 2012, en relación al Proyecto “Línea de Transmisión en Postes de Hormigón 110 KV Melipeuco- Freire”.

¹⁶ Seremi de Desarrollo Social, CONADI.

¹⁷ Considerando 13°.

En él la Corte Suprema analiza una temática similar a la luz del principio de proporcionalidad, al señalar que: “Jamás se argumentó por los actores que esos terrenos –de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado– les prestaran funciones ambientales relevantes, como la presencia de especies vegetales o animales, existencia de humedales o sitios de significación cultural”¹⁸. Ya en esa época, la Corte Suprema reafirmaba que para que exista un derecho a consulta, no es suficiente con solicitarla alegando una afectación genérica, sino que es un requisito ineludible el fundamentar y acreditar que existe una afectación, debiendo explicitar “razonablemente cómo les afectaría el proyecto calificado favorablemente por la autoridad ambiental recurrida”¹⁹. Dicho de otro modo, “lo que la Corte Suprema hace al demandar que la consulta sea “razonablemente explicitada” es hacer un llamado al sentido común y excluir el absurdo al momento de solicitar o determinar su procedencia. Deben existir, en buenas cuentas, razones de hecho y de derecho que justifiquen su procedencia”²⁰.

4.2. En relación a las alegaciones de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos

Como se indicó, la alegación principal tiene que ver con la forma en cómo se llevó a cabo la consulta por parte de la Autoridad Ambiental, desconociéndole validez.

Sobre este particular, la Corte de Copiapó hace una primera advertencia al señalar que –tal como lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia– el sentido de la Consulta Indígena

“no es solamente la exposición del proyecto a aquellos, sino que también respecto de dicho procedimiento se exige además de que la comunidad sea debidamente informada del contenido de aquel, que también sea escuchada en forma efectiva, pero en ningún caso se puede entender que dicha normativa refiera que las conclusiones a que se arribe por la comunidad indígena deban ser vinculantes para la autoridad a cargo de la evaluación ambiental”²¹.

¹⁸ Corte Suprema, Rol N° 1602-2012, considerando 9°.

¹⁹ Considerando 8°.

²⁰ CARRASCO (2013) p. 310.

²¹ Considerando N° 19.

Luego analiza en detalle las exigencias del Convenio N° 169 de la OIT, señalando que la misma requiere (i) buena fe; (ii) procedimientos apropiados, y (iii) la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En este punto, es digno de elogio el avance de la Corte en el análisis de la materia, ya que por lo general las decisiones de los tribunales iban en la línea de reconocer la necesidad de un proceso de participación con un estándar algo diferente que incluyera el “espíritu” del Convenio, para dar por cumplido el requisito de la consulta indígena.

En este caso, la Corte desarrolla el punto, haciendo ver que la consulta no se agota en un trámite únicamente formal, sino para ser un instrumento que de verdad permita garantizar la participación de los afectados, debe suponer al menos (i) apertura al diálogo; (ii) evitar dilaciones; (iii); objeciones fundadas; (iv) evitar peticiones irracionales; (v) inexistencia de derecho a veto *ex ante*; (vi) seguimiento de las etapas procesales; y (vii) interpretación de los actos de la contraparte favorable, con miras a el objetivo de alcanzar un acuerdo. Como se aprecia, la Corte no hace un tratamiento a la ligera del tema, sino que se inserta en el centro de la problemática de la consulta, llegando al detalle mismo de la forma en que las partes deben actuar para que la misma pueda llegar a término.

Así, constata del mérito del proceso que:

- a. La consulta duró 15 meses;
- b. La autoridad ambiental hizo todos los esfuerzos necesarios por agilizar el proceso;
- c. La Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos impuso diversas condiciones que fueron aceptadas en el proceso
- d. Pese a haberse arbitrado los espacios requeridos, la comunidad no entregó información que permitiera alcanzar acuerdos, sin perjuicio de existir antecedentes suficientes para que la autoridad pudiera ponderar la existencia o inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300.

Análisis aparte, merece el trato que la Corte da al requisito de la buena fe. En este punto los sentenciadores recurren a la doctrina de la propia OIT para decir con total claridad que “... ambas partes deben procurar llegar a un acuerdo, efectuar negociaciones genui-

nas y constructivas, evitar demoras injustificadas, cumplir con los acuerdos pactados y ponerlos en práctica de buena fe”²². En la misma línea argumental, la Corte de Copiapó cita a al Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas²³ y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos²⁴ para dar por sentada una premisa de la mayor relevancia a la hora de resolver. Esta es la responsabilidad que les cabe a los propios pueblos indígenas (además de al Estado) para generar el clima necesario para posibilitar una consulta de buena fe, en la que encuentra una importancia gravitante la responsabilidad primaria de participar en dichos procesos. Dicho de otro modo, los pueblos indígenas –no cabe duda que también el Estado– tienen también que asumir sus propias obligaciones en el marco del proceso de consulta, y como veremos su no cumplimiento no tiene como efecto un veto que haga inviable concluir con el proceso de consulta.

Ello además se ve refrendado por las disposiciones del D.S. N° 66/2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que contiene el Reglamento de Consulta Indígena, que en su artículo 9° establece que

“La buena fe es un principio rector de la consulta, en virtud del cual todos los intervinientes deberán actuar de manera leal y correcta con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento previo, libre e informado en el marco del procedimiento (...). Los intervinientes no podrán realizar conductas, acciones u omisiones que obstaculicen el normal desarrollo del proceso de consulta previa o impidan alcanzar su finalidad, así como aquellas que pretendan burlar o desconocer los acuerdos alcanzados”.

Finalmente, la Corte da por establecido que la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos es efectivamente afectada por la resolución recurrida, pero que no es únicamente titular de derechos sino que adicionalmente es sujeto de obligaciones. Concluye entonces que “la recta razón permite calificar los esfuerzos de la autoridad como razonables para entrar en diálogo con la comunidad denunciante, y si este fracasó, por no alcanzarse el buscado acuerdo,

²² El considerando 23° cita la publicación OIT (2013) p. 16.

²³ Se refiere al informe de ANAYA.

²⁴ Se refiere al informe de la CIDH.

no fue justamente por la falta de buena fe que se reprocha a la administración”²⁵.

Por las razones anteriores, rechaza los recursos de protección, en atención a que la Resolución que se impugnó no es arbitraria ni ilegal y cumple con los principios participativo y de equidad ambiental.

5. LA CORTE SUPREMA

La Corte Suprema, en esta oportunidad, revoca el fallo de la Corte de Copiapó, pero curiosamente sin entrar en el fondo del tema debatido, que es la falta o la insuficiente aplicación del mecanismo de consulta indígena, al amparo del Convenio N° 169 de la OIT. De hecho, elimina los considerandos 6° a 26° de del fallo de la Corte de Apelaciones, que –correctamente a nuestro juicio– se hacen cargo de la discusión relevante.

Hubiera sido interesante que la Corte Suprema conociera de esas materias pero, como en otras ocasiones, prefirió evitar el tema sustancial y enfocar su decisión en cuestiones propias del derecho administrativo²⁶.

La Corte Suprema da inicio a su fundamentación explicando las peticiones de los apelantes: (i) que no se les incluyó en la consulta indígena (respecto de las Comunidades y Asociaciones Indígenas Diaguitas); y que la resolución se dictó sin una consulta previa, libre e informada, como lo había ordenado la propia Corte Suprema en sentencia anterior (respecto de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos).

A continuación, indica que la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos²⁷ ha deducido el recurso administrativo que la legislación ambiental establece contra las resoluciones de calificación ambiental en la Ley N° 19.300 y que el mismo se encuentra pendiente. Asimismo, mantiene la ya permanente deferencia hacia los tribunales ambientales, creados por la Ley N° 20.600. Sin embargo, sobre este

²⁵ Considerando N° 24°.

²⁶ Recuérdese la sentencia de casación por el caso Pascua Lama, donde derechamente evitó conocer respecto de la forma en que había sancionado la Superintendencia del Medio Ambiente, resolviendo de oficio una cuestión procesal sobre legitimación activa. Rol N° 11.600-2014.

²⁷ También lo dedujeron los agricultores recurrentes, pero no son objeto de este análisis.

punto, al menos debe indicarse que si bien la Corte Suprema reiteradamente indica que existe esta nueva judicatura especializada que es quien debe resolver, son mínimos los casos en que se ha abstenido para ceder dicha competencia y este no es uno de ellos²⁸. Por lo tanto, una cosa es lo que la Corte Suprema señala en la teoría, pero en la mayoría de los casos es la misma Corte Suprema quien ejecuta en la práctica la resolución de las materias que deberían quedar entregadas a la resolución de los Tribunales Ambientales.

Para lo anterior, se vale de un argumento que es el “analizar si las ilegalidades denunciadas en el recurso de protección de los apelantes requieren de una cautela urgente e inmediata a las garantías constitucionales que denuncian infringidas”²⁹. Sin embargo, como se verá el análisis no es en ningún caso concluyente y discurre sobre la base de una adecuada fundamentación de los oficios emitidos por CONADI, en el marco de un procedimiento administrativo complejo como es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Comienza, en esa línea, a explicar el procedimiento de evaluación y lo que se entiende por “Ventanilla Única”, además de dar mucho énfasis a la necesidad de que la opinión de los servicios sea fundada, característica habitual a cualquier acto administrativo.

Basado en ello la Corte Suprema se interna en el análisis de los Oficios emitidos por CONADI los que fueron emitidos con posterioridad a que se reanudara el procedimiento de evaluación –según ella misma había ordenado en sentencia anterior– y los contrasta con los oficios de ese mismo servicio sectorial emitidos previamente a esa sentencia, y por lo mismo, con anterioridad a que el titular del

²⁸ Sobre el particular, una sentencia reciente de la Corte Suprema respecto del proyecto “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago-Rancagua” señala en su considerando segundo que “tanto por encontrarse pendientes de decisión ante la autoridad administrativa correspondiente reclamaciones formuladas y no resueltas, deducidas en contra de la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, cuanto porque en general la decisión misma de una solicitud que tenga por objeto dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental debe ser resuelta en el procedimiento jurisdiccional ambiental pertinente, no cabe sino concluir que la pretensión hecha valer en esta sede –que supone declaraciones, valoraciones y decisiones técnicas– escapa de los márgenes de la presente acción cautelar de urgencia intentada, razones todas por las que el recurso analizado no puede prosperar y debe ser desestimado”. Rol N° 26.198-2014.

²⁹ Considerando 11°.

proyecto subsanara la información faltante sobre el componente indígena mediante el adenda N° 5.

En este sentido, la Corte Suprema da por sentado que “CONADI tuvo que informar, fundadamente, como lo exige la ley, si existían o no otras Comunidades Indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto, lo que no realizó”, en atención a que la Resolución administrativa que ordenaba dar inicio al proceso de consulta por parte de la Autoridad Ambiental ordenaba oficiar a ese servicio para que colaborara con el desarrollo de esa instancia especial. De ello, en ningún caso se sigue que CONADI haya debido informar lo que la Corte Suprema señala, sino que se le pide colaboración, como el propio Reglamento del SEIA establece, ya que el órgano encargado de la consulta es el que emite la medida administrativa, esto es, la Comisión de Evaluación Ambiental.

En el fallo la Corte Suprema, analiza en detalle dos oficios de CONADI. En primer lugar, el que se pronuncia sobre el adenda N° 5, documento que contiene la nueva información proporcionada por el titular al retrotraerse el proceso de evaluación ambiental. Indica la Corte Suprema que no existe fundamentación de por qué no surgen nuevas observaciones por parte de CONADI y más adelante concluye que lo anterior constituiría un vicio. Al parecer en este punto, la Corte Suprema desconoce aspectos básicos del procedimiento de evaluación, donde los servicios sectoriales, en el marco de un procedimiento reglado, evalúan en el ámbito de sus competencias un determinado proyecto o actividad. En el procedimiento de evaluación, los servicios a quienes se les requiere aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones de la información, deben necesariamente fundar su respuesta. Sin embargo, la práctica administrativa ha establecido que si de la revisión de la información el Servicio está de acuerdo con lo que indica al titular, se manifiestan “conforme” con el documento.

Algo similar ocurre con el Oficio de CONADI que la Corte Suprema analiza en segundo lugar, y que se pronuncia sobre el informe consolidado de la evaluación (ICE).

A través de los fundamentos recién expuestos, la Corte Suprema da por establecido que tanto la Ley N° 19.880 como la Ley N° 19.300 exigen pronunciamientos fundados, y que por ello, los Oficios de CONADI –que no darían cumplimiento a esas disposiciones– ado-

lecen de un vicio que los transforma en ilegales y arbitrarios. Como consecuencia de lo anterior, también sería ilegal y arbitraria la resolución de calificación ambiental del proyecto, por lo que finalmente resuelve revocar la sentencia apelada.

6. VOTO DE MINORÍA

Dos de los ministros de la sala suscriben un voto de minoría, señalando que son del parecer de confirmar la sentencia de alzada, ya que a su juicio, las ilegalidades y arbitrariedades que se denuncian por los apelantes, en el evento de considerarse que se configuran, no sería a su respecto necesario una cautela con carácter de urgente.

7. COMENTARIO Y CONCLUSIONES

Cabe hacerse la pregunta de si hubiera sido más razonable que la Corte Suprema entrara a resolver el fondo sobre la procedencia o no de la consulta indígena, y si el procedimiento efectuado por la Autoridad Ambiental consideró el estándar del Convenio N° 169.

Ello, por cuanto el análisis sobre la fundamentación del acto administrativo, es evidentemente acomodado, y va incluso contra su propia jurisprudencia reciente, contenida en la Sentencia Rol N° 16.706-2014, en relación al proyecto “Loteo Riberas de La Dehesa”. En dicho fallo, la Corte Suprema argumenta que:

“Que el artículo 13 inciso segundo de la Ley N°19.880 dispone que: “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado” (considerando 15°).

“Que a propósito del principio de conservación del acto administrativo que refleja la disposición legal precedentemente citada, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido en forma reiterada que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial. Subyacen a este principio de conservación otros principios generales del Derecho como la confianza legítima que el acto genera, así como la buena fe de los terceros, el respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Efectivamente, no cualquier irregularidad o defecto justifica la declaración de nulidad, sino

cuando dicha anomalía conculque las garantías de los administrados. (Corte Suprema roles 5815-2011; 57-2011; 274-2010; 3078-2013)” (considerando 16°).

¿Puede decirse, por tanto, que un informe de CONADI, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.880 no es vinculante para la decisión de la Comisión de Evaluación de aprobar o rechazar un determinado proyecto, pueda constituir un vicio esencial que permita dejarlo sin efecto y consecuentemente anular la resolución de calificación ambiental?

Se suma a ello lo que dispone el artículo 41 inciso sexto de la misma ley en el sentido que “la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma”. Es decir, cuando la CONADI se manifiesta “conforme” con el ICE, se entiende que dicho informe consolidado de la evaluación ambiental es precisamente el fundamento de su conformidad. Lo mismo cuando ese servicio se pronuncia en relación a la adenda N° 5, oficio en el cual, incluso hace observaciones en relación a una de las comunidades y a la forma en que la Autoridad Ambiental lleva adelante la consulta.

Lo anterior es más complejo aún, si entendemos que el órgano de la administración del Estado que tiene por obligación efectuar la consulta es el Servicio de Evaluación Ambiental y no la CONADI, a la que solo se le pidió colaboración.

Es claro, al respecto, el artículo 85 del Reglamento del SEIA, que dispone que en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias establecidos en sus artículos 7, 8 y 10:

“en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Servicio [de Evaluación Ambiental] deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley, diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. De igual manera, el Servicio establecerá los mecanismos para que estos grupos participen durante el proceso de evaluación

de las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones de que pudiese ser objeto el Estudio de Impacto Ambiental”.

En cambio, el artículo 83 del mismo reglamento establece una “facultad” para el Servicio de Evaluación Ambiental³⁰ de solicitar colaboración a otros órganos de la administración del Estado. Así dispone que “Para la implementación de los mecanismos a que se refiere este Título, el Servicio podrá solicitar la colaboración de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental o con competencia en materia de desarrollo comunitario, social o indígena y/o de participación ciudadana”.

Ello ha sido refrendado por la Contraloría al indicar que

“los indicados vicios de procedimiento no son de aquellos que afecten la validez del acto administrativo en cuestión, según lo dispuesto en el artículo 13 de Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado. En efecto, conforme a la norma recién citada –que coincide además con la jurisprudencia administrativa previa recaída en la materia– un vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. Tales condiciones no concurren en la especie, puesto que como se ha dicho, la participación del municipio recurrente no era imprescindible para resolver sobre la calificación ambiental, ya que el municipio podría haberse abstenido de participar en el procedimiento respectivo, a lo que es dable agregar, adicionalmente, que tampoco se fundamenta la impugnación del rubro en algún aspecto de fondo que se hubiera visto afectado como consecuencia de las omisiones aludidas, y que los informes que emiten los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental no son vinculantes para la Comisión del Medio Ambiente respectiva”.

Se trata, entonces, de vicios que carecen de la entidad para ser invalidantes y no permiten, en tal circunstancia, dejar sin efecto los pronunciamientos de los servicios sectoriales. En palabras de Jara

³⁰ Órgano que por disposición legal tiene la facultad de administrar el SEIA.

“suponen la existencia de ciertos vicios o irregularidades cuya concurrencia no conlleva la invalidez del acto o del procedimiento con cuya ocasión se han cometido. Se trata de vicios intrascendentes, que por mandato del legislador quedan al margen de un eventual reproche invalidante ya sea por motivos de economía o de informalismo procedimental”³¹.

Es revelador, en esta materia, el artículo 86 del Reglamento del SEIA, el que en su inciso final establece que “Las actas de las reuniones a que se refieren los incisos anteriores podrán servir de motivación de las resoluciones fundadas de los artículos 36 y 48 del presente Reglamento, o bien a la Resolución de Calificación Ambiental según corresponda”³².

Parece claro, entonces, que la fundamentación en relación a la consulta debe estar más bien en la resolución de calificación ambiental que en los pronunciamientos sectoriales porque en definitiva, es la autoridad ambiental la llamada a cumplir con el mandato de la consulta indígena, y ahí se produce el problema interpretativo que a nuestro juicio mantiene la sentencia de la Corte Suprema comentada.

Y es que si la Corte Suprema hubiera revisado la resolución de calificación ambiental del proyecto³³ habría encontrado con facilidad la fundamentación sustanciada existente a partir del considerando 5.1, tanto respecto de la consulta efectuada a la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, como a las Comunidades Indígenas Diaguitas que se encontraban en el área de influencia del proyecto.

Al margen de ello, otro de los temas complejos de la sentencia es que da prácticamente por sentado que por encontrarse en el área de influencia de un proyecto habría una susceptibilidad de afectación, lo que carece de toda lógica. Así, el área de influencia se define como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o

³¹ JARA (2004) pp. 188-89.

³² Reuniones con grupos humanos indígenas para determinar si procede el término anticipado de la evaluación.

³³ Resolución Exenta N° 232/2013, de la Comisión de Evaluación de Atacama.

bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, pero en ningún caso permite acreditar *per se* la existencia de tales efectos, características o circunstancias. Es decir, es perfectamente posible que las comunidades indígenas pueden estar dentro del área de influencia definida por el titular del proyecto y no darse a su respecto una afectación directa como lo exige el Convenio N° 169 de la OIT. Quizás, el desconocimiento de la forma en que se lleva a cabo una evaluación ambiental impide a la Corte captar el sentido de los términos que la legislación ambiental considera.

Volviendo a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, es evidente que hay una clara y contundente fundamentación de las motivaciones que tuvo la autoridad ambiental para dar por cumplidos los requisitos del Convenio N° 169 de la OIT respecto de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, analizando incluso cada uno de los principios que inspiran la realización de la consulta a la luz del citado Convenio.

En forma complementaria, el considerando 5.1.b trata, asimismo, la “Situación de otras comunidades o grupos humanos indígenas”, señalando con total claridad que “La Resolución N° 69/2013 no excluyó anticipadamente la posible integración de otras comunidades o grupos indígenas”. Indica, en esa línea, que la resolución que dio inicio a la consulta tuvo la publicidad suficiente, lo que acredita indicando los medios y fechas en que se publicitó el proceso, para finalizar indicando que “Sin embargo, en Adenda 5 el titular no identificó impactos significativos respecto de otras comunidades o grupos indígenas, y no hubo presentación alguna de otras agrupaciones indígenas respecto de requerir fundadamente, participar en un proceso de Consulta Indígena”. Cabe indicar que la resolución final del procedimiento incorpora, además, una medida voluntaria del titular, que pese a no reconocer la existencia de impactos en otras comunidades, incorpora un fondo de desarrollo para las comunidades indígenas aledañas.

¿Habría realmente una falta de fundamentación de carácter invalidante en el procedimiento de evaluación? Quizás si la sentencia hubiera analizado la Resolución de Calificación Ambiental (que solo la nombra para declarar su nulidad consecuencial), probablemente la decisión hubiera sido diferente.

Hay poco análisis en el fallo de la Corte Suprema respecto a las resoluciones de la Autoridad Ambiental que buscan reiteradamente implementar el proceso de consulta. En esa línea, tampoco se hace cargo de la abundante jurisprudencia que destaca la necesidad de acreditar la afectación por parte de los grupos humanos indígenas, por lo que evidentemente hay un vuelco que traslada la carga probatoria desde los interesados a la autoridad. Ello genera incertezas evidentes a los proyectos de inversión, que parece mejor evitar.

Es evidente la dificultad que tiene la implementación de los mecanismos de consulta, sea en proyectos de inversión u otro tipo de medidas, como la creación de la nueva institucionalidad indígena, que no ha estado exenta de problemas. Ante ello, la Corte Suprema debe volver a sus criterios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de resolver, evitando complejizar aún más las cosas al desconocer la práctica administrativa general en los pronunciamientos que los servicios sectoriales emiten en el marco del SEIA y exigiendo un estándar aún mayor. Lo relevante parece ser el esfuerzo que hace la autoridad para llevar a cabo el proceso de consulta, y el rol que a nuestro juicio le corresponde a la Corte Suprema es, junto con velar para que la administración activa cumpla su rol, asegurar que las comunidades den cumplimiento también a las obligaciones que le caben en estos procesos. De lo contrario, se promueve una suerte de derecho a veto, que como ya hemos señalado, no encuentra asidero en nuestro derecho.

Sin duda que el fallo genera complejidades para el SEIA y desconocemos cuáles puedan ser sus alcances. Ello, por cuanto la utilización de un estándar de motivación como el requerido constituye un cambio radical a la forma en que se realiza la evaluación ambiental en Chile.

Parece más prudente razonar desde la interpretación que efectúa la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre las características de la consulta indígena, de la mano de una interpretación razonable de las normas del Convenio N° 169, que administrativizar aún más el expediente de evaluación ambiental.

El sano equilibrio parece encontrarse en la exigencia de una fundamentación más completa al acto terminal (resolución de calificación ambiental), dando espacio a que la Autoridad Ambiental pueda desenvolverse con cierta flexibilidad en la búsqueda de procedi-

mientos de consulta que den cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos

ANAYA, James (2005): *Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional* (Trotta S.A.).

BERMÚDEZ, Jorge (2011): *Derecho Administrativo General* (Legal Publishing).

CARRASCO, Edesio (2013): “Razonabilidad y proporcionalidad: criterios para la determinación de la consulta indígena en proyectos de inversión en el marco del Convenio N° 169 de la OIT”, *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 40, n. 1: pp. 299-314.

CONTESSE, Jorge (Ed.) (2012): *El Convenio N° 169 de la OIT y el derecho chileno. Mecanismos y obstáculos para su implementación* (Ediciones Universidad Diego Portales).

DONOSO, Sebastián (2013): “Declaraciones de Impacto Ambiental y consulta indígena en el SEIA: comentario a la tendencia de homologación de los impactos ambientales que exigen un EIA y la susceptibilidad de afectación directa del Convenio N° 169 OIT”, en FERNANDOIS, Arturo y José Francisco GARCÍA (Eds.): *Sentencias Destacadas 2012* (Ediciones LYD): pp. 57-83.

JARA, Jaime (2004): *La Nulidad de derecho público ante la doctrina y la jurisprudencia* (Libromar).

Jurisprudencia

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 17 de febrero de 2012, Rol N° 618-2011. Disponible en: www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 8 de junio de 2012, Rol N° 1602-2012. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 16 de septiembre de 2013, Rol N° 1377-2013. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 21 de octubre de 2013, Rol N° 8616-2013. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó de fecha 28 de abril de 2014, Rol N° 436-2013. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 7 de octubre de 2014, Rol N° 11.299-2014. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015]

Sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 10 de noviembre de 2014, Rol N° 1246-2014. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 2 de diciembre de 2014, Rol N° 30.026. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Sentencia de la Corte Suprema de fecha 29 de diciembre de 2014, Rol N° 26.198-2014. Disponible en www.poderjudicial.cl [Fecha de consulta: 29 de enero de 2015].

Otros

ANAYA, James. Informe “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile”. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/InformeConsultaChile.pdf> (última visita 2 de febrero de 2015).

CIDH. Informe “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”. Disponible en: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf> (última visita 2 de febrero de 2015).

OIT (2013): “Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT”.